



Roj: **STSJ CAT 1746/2021 - ECLI:ES:TSJCAT:2021:1746**

Id Cendoj: **08019330022021100210**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Barcelona**

Sección: **2**

Fecha: **11/03/2021**

Nº de Recurso: **379/2019**

Nº de Resolución: **1091/2021**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **VIRGINIA MARIA DE FRANCISCO RAMOS**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

## **TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA**

### **SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO**

#### **SECCIÓN SEGUNDA**

#### **Recurso de apelación nº 379/2019**

Partes: AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

C/ MOVIL PEREGRINOS S.L

**S E N T E N C I A** Nº 1091/2021 - (Secció: 225/2021)

**Ilmos. Sres. Magistrados:**

**Don Jordi Palomer Bou**

**Doña Virginia de Francisco Ramos**

**Doña Rocio Colorado Soriano**

En la ciudad de Barcelona, a 11/03/2021

**VISTOS POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA (SECCIÓN SEGUNDA)**, constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el rollo de apelación nº 379/2019, interpuesto por el AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC, representado por el Procurador de los Tribunales FCO. JAVIER MANJARIN ALBERT y asistido de Letrado, contra MOVIL PEREGRINOS S.L, representado por el Procurador ALBERTO ASENSIO MALO y asistido de Letrado.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada D<sup>a</sup>. Virginia de Francisco Ramos, quien expresa el parecer de la Sala.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** El Juzgado Contencioso Administrativo 14 Barcelona dictó en el P.S. medidas cautelares nº 30/2019, el Auto definitivo de fecha 16 de mayo de 2019, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Se acuerda estimar la petición de medida cautelar formulada por la entidad Móvil Peregrinos, S.L. a través de su representación procesal; y en consecuencia se suspende la ejecutividad de la resolución impugnada en el procedimiento principal; y ello hasta la resolución del proceso jurisdiccional seguido en los autos principales de los que dimana esta pieza separada."

**SEGUNDO.-** Contra dicha resolución, se interpuso recurso de apelación, siendo admitido por el Juzgado de Instancia, con remisión de las actuaciones a este Tribunal previo emplazamiento de las partes, siendo parte apelante el AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC, y apelada MOVIL PEREGRINOS S.L.

**TERCERO.-** Desarrollada la apelación se señaló día y hora para votación y fallo, que ha tenido lugar el día 24-2-2021.

**CUARTO.-** En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** Por la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE MONTCADA I REIXAC se interpone recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado contencioso administrativo nº 14 de Barcelona de fecha 16/5/2019 que estima la medida cautelar peticionada por la entidad MOVIL PEREGRINOS SL.

**SEGUNDO.-** Como es de ver en las actuaciones, la entidad MOVIL PEREGRINOS SL solicita al juzgado a quo la suspensión cautelar de la ejecutividad de la resolución dictada por el citado Ayuntamiento de fecha 17/1/2019, resolución que: 1) confirma la multa coercitiva por importe de 1.000 euros tras comprobar que no se ha procedido al derribo de la construcción levantada sin licencia (formada por una estructura metálica de superficie aproximada de 550 m y uso industrial para el mantenimiento de vehículos) en zona verde y reserva viaria, 2) concede nuevo término de un mes para proceder a la demolición acordada, 3) advierte que si transcurrido dicho término no se ha efectuado la restauración ordenada, se impondrá una nueva multa coercitiva de 1.500 euros, 4) advierte que, en caso de nuevos incumplimientos, pueden imponerse nuevas multas coercitivas de manera reiterada de hasta 3.000 euros y, 5) advierte que la multas coercitivas son compatibles con la imposición de sanciones por la comisión de una presunta infracción urbanística.

El juez a quo estima la petición de medida cautelar y acuerda mediante el auto impugnado suspender la ejecutividad de la resolución antedicha en base a que *"la demolición implica una destrucción de riqueza que puede resultar injustificada en caso de posterior estimación del recurso contencioso administrativo y que, por tanto, salvo exigencias inmediatas de interés públicos plenamente justificadas, ha de evitarse"*.

**TERCERO.-** Siguiendo un orden lógico de exposición, procede resolver de manera previa la alegada inadmisibilidad del recurso que refiere la entidad apelada. Alega que precluyo para la Administración el trámite de oponerse a la medida cautelar toda vez que en la instancia fue emplazada para ello y nada manifestó en ningún sentido, por lo que en este momento procesal no puede realizar alegaciones en cuanto a la cuestión de fondo que debería haber hecho en su momento.

Sin embargo y como bien es sabido, la preclusión es un término eminentemente procesal que tiene lugar cuando en el seno de un proceso, transcurren los plazos que prevén las leyes para la realización de las diversas actuaciones procesales. Ello conlleva la imposibilidad posterior de realizar el acto procesal omitido, por lo que el procedimiento (constituido por distintos trámites y fases) no se retrotrae sino que prosigue, pudiendo la parte interesada realizar los actos siguientes pero no los anteriores cuya posibilidad ha precluido.

En base a lo expuesto, es bien cierto que precluyo el trámite de alegaciones para la Administración en la instancia pero ello no es obstáculo alguno para que pueda intervenir en actuaciones posteriores como lo es el recurso de apelación contra el auto dictado por el juez a quo.

**CUARTO.-** Expuesto cual es el objeto de la cuestión litigiosa que subyace en el presente procedimiento, procede entrar a conocer la cuestión de fondo.

Lo primero que procede aclarar es que el acto administrativo impugnado no es la orden de derribo de una construcción realizada sin licencia municipal como parece haber entendido el juez a quo al resolver, sino la imposición de una multa coercitiva correspondiente a la ejecución forzosa de una orden de derribo no llevada a cabo.

Fijado así el objeto de la medida cautelar y cuya suspensión se pretende, lo cierto es que la entidad apelada no ha aportado prueba alguna de los perjuicios de imposible o difícil reparación que la no suspensión cautelar de la resolución le pudiera ocasionar. Además, los perjuicios que en principio se derivarían serían económicos (perfectamente evaluables) y, por tanto, resarcibles económicamente, por lo que no inciden sobre la finalidad legítima del recurso. Es por ello que, efectuada la ponderación de los intereses en conflicto como exige el art. 130 de la LJCA, resulta evidente que la indemnidad de aquélla se ofrece plenamente posible en caso de que su pretensión de fondo sea acogida.

A mayor abundamiento, la prevalencia del interés público sobre el interés económico particular se ofrece evidente dada la vinculación que debe reclamarse a cualquiera en cuanto a la observación y cumplimiento de las obligaciones en materia de legalidad urbanística. El mecanismo existente para el otorgamiento de licencias (ya sea de instalaciones o de actividades) es un bien superior (garantiza la seguridad general de los ciudadanos) a las circunstancias económicas de la entidad apelada, más aún cuando el uso de la construcción



sin licencia (en el caso de autos) sitúa a dicha entidad en una situación de ilegalidad, no siendo posible otorgar ningún tipo de ventaja a quien se coloca en la misma de forma voluntaria.

Es por ello que procede estimar el recurso de apelación, revocar el auto impugnado y denegar la medida cautelar peticionada en su momento por la entidad MOVIL PEREGRINOS SL.

**QUINTO.-** De conformidad con el art. 139.2 de la LJCA, no ha lugar imposición de costas

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

## FALLAMOS

**1º.- ESTIMAR** el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE MONTCADA I REIXAC contra el auto dictado por el Juzgado contencioso administrativo nº 14 de Barcelona de fecha 16/5/2019, que se REVOCA por ser contrario al ordenamiento jurídico procediendo, en consecuencia, DENEGAR la medida cautelar solicitada por la entidad MOVIL PEREGRINOS SL.

**2º.- NO HA LUGAR** imposición de costas.

Notifíquese a las partes la presente Sentencia, que no es firme. Contra la misma cabe deducir, en su caso, recurso de casación ante esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª, Capítulo III, Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). El recurso deberá prepararse en el plazo previsto en el art. 89.1 LJCA.

Y adviértase que en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, a la que remite el art. 236 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, hago saber a las partes que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina judicial, donde se conservarán con carácter confidencial y únicamente para el cumplimiento de la labor que tiene encomendada y bajo la salvaguarda y la responsabilidad de la misma y en donde serán tratados con la máxima diligencia.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al presente procedimiento, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

**PUBLICACIÓN.-** Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ponente, la Ilma. Sra. Magistrada Dª. Virginia de Francisco Ramos, estando la Sala celebrando audiencia pública. Doy fe.